

El caso SQM (Sociedad Química y Minera de Chile) reveló un esquema sistemático de financiamiento ilegal de la política chilena, mediante boletas ideológicamente falsas, pagos a fundaciones vinculadas a partidos y contratos simulados. La empresa, una de las principales productoras de litio del mundo, canalizó fondos hacia actores políticos de todos los sectores, incluyendo figuras clave de la derecha, la centroizquierda y la izquierda, durante al menos una década.

El principal ejecutivo involucrado fue Patricio Contesse, gerente general de SQM entre 1990 y 2015, quien autorizó pagos sin justificación comercial a decenas de personas y entidades vinculadas al mundo político. También estuvieron implicados altos ejecutivos de las áreas de finanzas y legales. El caso estalló tras una investigación derivada del caso Penta, cuando el Servicio de Impuestos Internos (SII) detectó irregularidades en las rendiciones de gastos.

El directorio de SQM, presidido en ese momento por Julio Ponce Lerou —ex yerno de Augusto Pinochet y accionista histórico de la empresa— fue objeto de duras críticas por no ejercer controles adecuados ni limitar el poder de Contesse. Aunque Ponce Lerou afirmó no tener conocimiento directo de los pagos, los cuestionamientos sobre su influencia informal en las decisiones operativas persistieron. La gobernanza de la empresa, con vínculos históricos entre elites económicas y políticas, fue señalada como un factor estructural que permitió la práctica sostenida del financiamiento irregular.

SQM llegó a un acuerdo con el Ministerio Público en 2021, pagando más de 15 millones USD para suspender definitivamente la causa penal, sin admitir culpabilidad formal. Esto representó una fracción mínima de sus ingresos anuales, que superaron los 1.800 millones USD ese mismo año. El caso también provocó reformas en la legislación sobre financiamiento electoral, incluyendo la prohibición de aportes de personas jurídicas.

Más allá de las consecuencias judiciales, el caso SQM generó un fuerte deterioro en la confianza pública hacia el mundo político y empresarial chileno, y puso en el centro del debate el rol ético de las empresas estratégicas en democracias en consolidación.

Fuentes:

- Ministerio Público de Chile, 2021
- CIPER Chile, 2015–2021
- Diario La Tercera, 2016–2020
- SQM Annual Report, 2021